

TEMA 24

LUGARES DE CULTO Y CEMENTERIOS RELIGIOSOS

Ángeles Liñán García
Prof^a Contratada Doctora
Universidad de Málaga

Sumario

1.INTRODUCCIÓN

2.LOS LUGARES DE CULTO: ORIGEN DEL TÉRMINO Y DELIMITACIÓN CONCEPTUAL

3. LA TUTELA DE LOS LUGARES DE CULTO:

3.1. EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

3.2. EN EL ÁMBITO EUROPEO

3.3 EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

A. Constitución y normas de desarrollo

B. Acuerdos firmados con la Iglesia Católica y las confesiones no católicas

4.ESPECIAL PROBLEMÁTICA DE LOS LUGARES DE CULTO: ASPECTOS URBANÍSTICOS Y ADMINISTRATIVOS

4.1.PRINCIPIOS INFORMADORES DEL CONTROL

ADMINISTRATIVO DE LOS LUGARES DE CULTO: UBICACIÓN,
LICENCIAS DE APERTURA Y CONSTRUCCIÓN

5.LOS CEMENTERIOS RELIGIOSOS: ASPECTOS JURIDICOS

6.AUTOEVALUACIÓN

7.BIBLIOGRAFÍA

1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas del pasado siglo y primeras del presente la sociedad española ha experimentado notables cambios por la confluencia de varios factores: la inmigración de personas que profesan distintas creencias, los efectos de la globalización, la aparición de nuevas tecnologías, etc. Cambios que han generado una sociedad diversa desde el punto de vista social, cultural y religioso. Por ello, quizás, uno de los grandes desafíos que tienen que asumir todos los Estados democráticos del momento y, entre ellos del Estado español es adaptarse a esta nueva realidad para conseguir una gestión eficaz de esta diversidad religiosa en el espacio público, sin discriminaciones, que evite soluciones segregadoras, negativas para la convivencia o ilegales por vulnerar el principio de igualdad. Dicha tarea solo se podrá llevar a cabo dentro de un marco normativo adecuado. Además, la actividad de la Administración en un Estado de derecho estará sujeta al principio de legalidad que implicará que cualquier intervención pública restrictiva de derechos habrá de estar justificada y establecida conforme a la ley.

Ya hemos estudiado que en España se reconoce el derecho de libertad religiosa y de culto que comporta la facultad de realizar, practicar y participar en actos de culto, tanto públicos como privados de manera individual o colectiva sin más limitación en su manifestación que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Igualmente, que en el “hecho religioso” apreciamos una doble dimensión: la individual o subjetiva (personas físicas) y la colectiva o comunitaria (personas jurídicas) que son inescindibles la una respecto de la otra.

En este caso, centramos el objeto de estudio en la manifestación pública del ser humano (individual o colectiva) de sus creencias, mediante la observancia de celebraciones religiosas colectivas, tradiciones culturales, conmemoración de festividades propias y de su derecho a recibir una sepultura digna conforme a sus ritos funerarios. Elementos todos ellos que comparten grupos de personas basados en unas mismas doctrinas, dogmas, formas de vida y explicación del sentido de la propia existencia. Lo que hace imprescindible que las distintas confesiones y comunidades religiosas minoritarias con representatividad en España puedan establecer y abrir lugares de cultos y cementerios confesionales que aseguren tanto el pleno desenvolvimiento de sus fines religiosos como el reconocimiento efectivo de su diversidad, signos de identidad, de su integración o más bien, de su normalización y visibilidad social de una presencia que va en aumento. En definitiva, es imprescindible facilitarles los espacios

necesarios y una ubicación espacial apropiada (que eviten problemas de segregación urbana) instaurando equipamientos destinados a actividades culturales y religiosas sin que se ocasionen discriminaciones o restricciones arbitrarias que dificulten el ejercicio pleno y pacífico del derecho de libertad religiosa y de culto en condiciones adecuadas (SEGLERS). Para ello, el ordenamiento jurídico español tendrá que articular no sólo los instrumentos normativos que garanticen a las confesiones religiosas el derecho de establecer lugares de culto, sino además otorgarles un régimen jurídico especial que proteja y tutele la singular significación de estos espacios dedicados a la práctica religiosa (RODRÍGUEZ) en consonancia con el objetivo último de la cohesión social y territorial.

2. LOS LUGARES DE CULTO: ORIGEN DEL TÉRMINO Y DELIMITACIÓN CONCEPTUAL

En la actualidad, el uso de la expresión “lugar de culto” se encuentra ya consolidado. Sin embargo, su aparición en los textos legales y doctrinales del ordenamiento jurídico español es relativamente reciente. Precisamente, en la década de los años sesenta del siglo XX, la [Ley 44/1967, de 28 de junio de 1957 sobre el ejercicio del derecho civil a la libertad en materia religiosa](#) reconocía en sus artículos 21.1. y 23 a las asociaciones confesionales no católicas practicar libremente el culto público y privado en los templos debidamente autorizados y la inviolabilidad de estos lugares. Con ella, el Régimen franquista pretendía adecuar la confesionalidad católica del Estado con las nuevas directrices del Concilio Vaticano II en materia de libertad religiosa consagrada en la [Declaración Dignitatis Humanae 1965](#). A tal efecto, dichas confesiones o comunidades religiosas tenían que solicitar su autorización al Ministerio de Justicia, detallando su emplazamiento, las características de los edificios, así como de los símbolos y denominaciones expresivos de su confesionalidad.

Después, en el periodo postconstitucional volvemos a encontrarlo en el Acuerdo Sobre Asuntos Jurídicos de 3 de enero de 1979 firmado entre el Estado español con la Iglesia católica:

Artículo I apartado 5º “Los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las Leyes. No podrán ser demolidos sin ser previamente privados de su carácter sagrado. En caso de su expropiación forzosa será antes oída la autoridad eclesiástica competente”.

Pues bien, una vez que hemos aludido brevemente cuáles son los inicios de dicha expresión en nuestro ordenamiento jurídico pensamos que es el momento de precisar/describir qué son “lugares de culto” para distinguirlos de otros términos afines como el de “lugar sagrado” (con un contenido más amplio pues, en la mayoría de las

ocasiones responde a espacio geográfico) o bien con otros como el de “equipamiento de uso religioso” empleado por el Derecho urbanístico para referirse a aquellos espacios erigidos con la finalidad de facilitar los servicios necesarios para el bienestar de la ciudadanía.

Sin embargo, en la práctica comprobamos que elaborar un concepto de “lugar de culto” no resulta una tarea sencilla. Quizás, si atendemos a razones de claridad expositiva quizás, lo más acertado será distinguir entre varios aspectos: el material, el teleológico y el formal (VÁZQUEZ).

A. Desde el aspecto material lugares de culto son todos los espacios físicos (edificios o locales) destinados a que las personas que profesan unas mismas creencias religiosas puedan reunirse para celebrar actos de culto, ceremonias, conmemoraciones y ritos religiosos. Después, cada confesión religiosa los denominará de forma distinta (iglesia, mezquita, sinagoga, salón del Reino, stupa, mandir, etc.) y les otorgará distinta consideración en atención a determinados criterios como por ejemplo:

- Sus dimensiones. En la confesión católica existen diferentes tipos de iglesias en función de sus superficies como catedral, basílica, santuario, ermita, capilla privada y oratorio.
 - La catedral es la sede donde se encuentra la cátedra del obispo. Por tanto, la principal de la diócesis y con capacidad para dar cabida a un mayor número de fieles.
 - La basílica en su origen edificios de carácter civil, generalmente tribunales de justicia adquirieron esta denominación por disposición expresa del Papa en atención a su valor histórico, cultural o religioso.
 - El santuario es el templo donde se venera la imagen o la reliquia de un santo al que los fieles suelen acudir en peregrinación.
 - La ermita es una iglesia de pequeñas dimensiones dedicada a un santo o a una advocación mariana, situada generalmente en una zona despoblada, a las afueras de una población, y en la que no suele haber culto permanente.
 - La capilla privada según el Código de Derecho Canónico (c. 1226) es un lugar destinado al culto divino, con licencia del Ordinario del lugar en beneficio de una o varias personas físicas.
 - El oratorio, al que se refiere el c. 1223 de CDC es también un lugar destinado al culto divino con licencia del Ordinario del lugar, pero en beneficio de una comunidad o grupo de fieles que acuden allí, al cual también pueden tener acceso otros fieles, con el consentimiento del Superior competente.

-Su forma. Trátarse de un único edificio o estar integrado dentro de un centro hospitalario, educativo, un aeropuerto, etc., o elementos que los individualizan. Así, en las Iglesias católicas, protestantes y ortodoxas (en un principio con una liturgia

común) las distintas concepciones teológicas que surgen de la interpretación de la Biblia (cismas) forjan los diferentes elementos que caracterizan sus templos en la actualidad:

- La Iglesia católica dispone de un presbiterio con altar y ambo, y la custodia para la reserva eucarística.
- La Iglesia ortodoxa se distribuye en torno al iconostasio o pared que va desde la parte norte a sur del templo separando el santuario (situado al este) de la nave, parte central del templo y en el que las imágenes de los santos se disponen en filas o hileras a través de toda su longitud.
- Las Iglesias protestantes disponen de un lugar específico para la Palabra y otro para el coro.

Lo mismo observamos en las otras religiones monoteístas como el Islam que en sus mezquitas disponen de patios, mihrab, iwanes, fuentes, textos del Corán. Si se trata de la religión hebrea en sus sinagogas reside el tabernáculo, el *tebá* con el *amud* y la *menorá* (PÉREZ).

La Iglesia Católica trata el asunto de forma específica en el Código de Derecho Canónico de 1983 en el Libro IV, en la Parte III relativa “a los tiempos y lugares sagrados” y Título I relativo a “los lugares sagrados” precisa:

c. 1205 “son aquellos que se destinan al culto divino o a la sepultura de los fieles mediante la dedicación o bendición prescrita por los libros litúrgicos.”

En lo mismo insisten, los acuerdos firmados en 1992 con las Confesiones evangélica, islámica y judía (firmados al amparo de la Ley Orgánica de Libertad religiosa 7/1980, de 5 de julio) en sus respectivos artículos 2 con algunas matizaciones en los que se describen los lugares de culto como los edificios o locales que estén destinados de forma permanente y exclusiva a las funciones de culto, práctica habitual de la oración, formación o asistencia religiosa.

B. Desde el aspecto teleológico son aquellos espacios que cada confesión religiosa destina al culto de forma pública y exclusiva para celebraciones litúrgicas. Sin embargo, un Estado laico no puede catalogar determinados actos como culturales porque se declara incompetente para la determinación de lo religioso. Por lo que tampoco podrá otorgar el carácter de lugares de culto a los inmuebles en que dichos actos se llevan a cabo. Su naturaleza como tales lugares de culto no la adquieren por el simple hecho de tener una finalidad religiosa y/o cultural, sino mediante la correspondiente certificación expedida por la autoridad religiosa de la confesión que posee un valor constitutivo. El Estado laico lo único que hará será tomar como referencia (técnica del presupuesto) el concepto confesional de lugar de culto que determine la respectiva confesión religiosa.

C. Por último, desde el aspecto formal en un Estado laico las diferentes confe-

siones religiosas con personalidad jurídica tienen reconocidas un estatuto jurídico especial, un conjunto de facultades o funciones, que conforme al art. 6 LOLR, consisten en la plena autonomía de organización, de su régimen interno, del régimen de su personal. Además, del nombramiento de quiénes son sus dirigentes y el establecimiento de relaciones con otras organizaciones y confesiones religiosas. Y en este caso, la facultad de extender la correspondiente certificación que acredita que un determinado inmueble es un lugar de culto.

No obstante, el Estado podrá condicionar la apertura y utilización de los lugares de culto a que cumplan determinadas condiciones objetivas, como un medio de prueba (de veracidad) de que entran en la categoría de lugares de culto, aunque sin entrar a valorar la legitimidad de las creencias.

De todo esto, podemos concluir que el concepto de lugar de culto no es unívoco sino polisémico. Presenta una tipología general a la que se añaden otras características específicas determinadas por cada confesión al ser éstas las únicas que están autorizadas para otorgarles tal calificación.

3. LA TUTELA DE LOS LUGARES DE CULTO

Existen numerosos textos y documentos que en la esfera internacional, europea y nacional reconocen la libertad religiosa y de culto, así como el derecho a no ser discriminados por motivos religiosos. Asimismo, hacen mención explícita a la especial transcendencia que las manifestaciones públicas y colectivas del hecho religioso generan en el espacio social como elemento esencial en la conquista de la cohesión social, cultural y jurídica (en sus diversas disciplinas: administrativa, penal, financiera, laboral, civil, etc.). Esto hace imprescindible que las distintas confesiones religiosas tengan lugares propios en los que realizar actos de culto y ritos funerarios conforme a sus peculiares características y exigencias:

3.1. EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

- La [Declaración Universal de Derechos Humanos](#) de 1948:

Art. 18.1: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia."

- El [Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre](#) de 1966 en varios artículos respectivamente:

Art. 18:”1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.”

Art. 27: “En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.”

Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Ese derecho incluirá la libertad de profesar o de adoptar la religión o creencia de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de ritos, las prácticas y la enseñanza.

- El [Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966](#):

Art. 13.3: “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”

- [Declaración sobre eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundada en la religión o en las convicciones de 1981](#):

Art. 1. “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de tener una religión o cualesquiera convicciones de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza.

2. Nadie será objeto de coacción que pueda menoscabar su libertad de tener una religión o convicciones de su elección.

3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias convicciones estará sujeta únicamente a las limitaciones que prescriba la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás.”

- La [Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los](#)

trabajadores migratorios y de sus familias de 1990:

Art. 12“Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Ese derecho incluirá la libertad de profesar o de adoptar la religión o creencia de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de ritos, las prácticas y la enseñanza.”

3.2. EN EL ÁMBITO EUROPEO

- Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950:

Art. 9.1:”Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos.”

2. La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyen medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los demás.”

- Carta Magna de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000:

Art. 10.1 “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, a través del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos.”

- Carta Europea de salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad firmada en 2011:

Art. III. 2. “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ejercer su libertad lingüística y religiosa. Las autoridades municipales, en colaboración con las demás administraciones, actúan de modo que los niños y niñas pertenecientes a grupos lingüísticos minoritarios puedan estudiar su lengua materna.

3. La libertad de conciencia y de religión individual y colectiva queda garantizada por las autoridades municipales a todos los ciudadanos y ciudadanas. Dentro de los límites de su legislación nacional, las autoridades municipales ejecutan todo lo necesario para asegurar dicho derecho velando por evitar la creación de guetos.

4. En su respeto por el laicismo, las ciudades favorecen la tolerancia mutua entre creyentes y no creyentes, así como entre las distintas religiones.
5. Las autoridades municipales cultivan la historia de su población y respetan la memoria de los difuntos, asegurando el respeto y la dignidad de los cementerios.“

3.3. EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

A) CONSTITUCIÓN Y NORMAS DE DESARROLLO.

El ordenamiento jurídico español en su Constitución de 1978 reconoce y garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades en las que estos se integran (art. 16.1 CE). Dicho precepto constitucional desarrollado por la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa (LOLR) establece de forma genérica:

Art. 2.2 “El derecho de las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas a establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos”.

Y, en especial, una serie de derechos relativos a la práctica del culto y asistencia religiosa:

Artículo 2.1, b: “Practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa de su propia confesión; conmemorar sus festividades, celebrar sus ritos matrimoniales; recibir sepultura digna, sin discriminación por motivos religiosos, y no ser obligado a practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa contraria a sus convicciones personales”.

En este sentido, también tenemos que destacar la doble obligación que impone la Constitución a todos los poderes públicos de:

Art. 9.2 “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

Igualmente, la [Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre de reforma de la Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social](#) dispone:

Art. 3.2. “Las normas relativas a los derechos fundamentales de los extranjeros serán interpretadas de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias vigentes en España, sin que pueda alegarse la profesión de creencias re-

ligiosas o convicciones ideológicas o culturales de signo diverso para justificar la realización de actos o conductas contrarios a las mismas”.

En la misma línea, la [Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres](#) señala:

Art. 31.1: “...las políticas urbanas y de ordenación del territorio tomarán en consideración las necesidades de los distintos grupos sociales y de los diversos tipos de estructuras familiares, y favorecerán el acceso en condiciones de igualdad a los distintos servicios e infraestructuras urbanas.”

B) LOS ACUERDOS BILATERALES DE COOPERACIÓN FIRMADOS ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL Y LAS CONFESIONES RELIGIOSAS

Ya hemos señalado que la Constitución de 1978 abrió un nuevo marco de relaciones entre las confesiones religiosas y el Estado en el contexto de sus principios informadores en materia religiosa. En este caso, del Principio de cooperación (art. 16.3 CE) que obliga a los poderes públicos a tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española. En un primer momento, obtuvieron el reconocimiento del notorio arraigo la Iglesia católica y las confesiones no católicas protestantes, judías e islámicas que refieren a algunos aspectos del régimen jurídico de los lugares de culto en sus distintos acuerdos como:

- Con la Iglesia católica. [El Acuerdo con la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos](#) ³ de enero de 1979 dispone:

Art. I.5: “Los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las leyes. No podrán ser demolidos sin ser previamente privados de su carácter sagrado. En caso de su expropiación forzosa, será antes oída la autoridad eclesiástica competente.”

- Respecto a los Acuerdos firmados con otras las confesiones religiosas no católicas mediante Leyes 24, 25 y 26, de 10 de noviembre de 1992 con la FEREDE, la Comunidad Judía de España y la Comisión Islámica de España respectivamente en sus artículos segundo establecen casi de forma idéntica lo mismo:

1. Son lugares de culto los edificios o locales que estén destinados de forma permanente y exclusiva a las funciones de culto o asistencia religiosa cuando así se certifique por la Iglesia respectiva.
2. Los lugares de culto gozan de inviolabilidad en los términos establecidos por las Leyes.
3. En caso de expropiación forzosa deberá ser oída previamente la confesión religiosa, salvo que existan razones de urgencia, seguridad y defensa nacionales

o graves de orden o seguridad públicos.

4. Los lugares de culto no podrán ser demolidos sin ser previamente privados de su carácter religioso, con excepción de los casos previstos en las Leyes, por razones de urgencia o peligro”.

No hemos tenido muchas ocasiones en la jurisprudencia de encontrar explicaciones sobre el alcance de la denominada “inviolabilidad de los lugares de culto”. La doctrina sí se había parado en su análisis (por todos Cfr. ROCA), aunque recientemente al hilo de la problemática jurídica desarrollada por el exhumación de los restos mortales del General Franco de un recinto religioso sí que el Tribunal Supremo ha señalado qué debe entenderse por la expresión jurídica inviolabilidad de un lugar de culto. En este sentido, la [Sentencia del Tribunal Supremo, Sección 4ª, Núm. 1279/2019, de 30 de septiembre](#) en su F.J. 6ª: señala que:

“A juicio de la Sala, la inviolabilidad reconocida por el acuerdo internacional suscrito con la Santa Sede no excluye la vigencia y aplicabilidad de las leyes en el interior de la Basílica. Esa inviolabilidad, dice el artículo 1.5) del Acuerdo de 3 de enero de 1979, es “con arreglo a las Leyes” y esas “Leyes” no pueden ser otras que las españolas. De otro lado, es preciso señalar de nuevo que la Basílica, el conjunto del Valle de los Caídos, es un bien de titularidad pública estatal integrado en el Patrimonio Nacional, aunque se haya confiado su administración a la Comunidad Benedictina.

Parece claro que la inviolabilidad en este contexto no puede ir en contra de la aplicación de las “Leyes” cuando en ellas no haya nada que afrente, coarte o impida el pleno ejercicio de la libertad religiosa. Y no la afrenta la actuación recurrida pues no está movida por ningún propósito antirreligioso sino por la significación extrarreligiosa del monumento de titularidad estatal en que yacen los restos a exhumar y por la que, inevitablemente, acompaña a estos últimos”.

Por ello, de cara a la interpretación jurídica de la palabra “inviolabilidad” hay que sumar, con lo que ello supone, “con arreglo a las leyes”.

4. ESPECIAL PROBLEMÁTICA DE LOS LUGARES DE CULTO: ASPECTOS URBANÍSTICOS Y ADMINISTRATIVOS

En general, en nuestro país existe una amplia oferta de lugares de culto. En su mayoría, del culto católico ubicados desde hace siglos (determinando la configuración de ciudades y poblaciones) pero también, de otras opciones religiosas como la judía e islámica distribuidas por todas las poblaciones de la geografía española. El ámbito municipal es el espacio en el que habitualmente se desenvuelven la mayor parte de los derechos fundamentales de la ciudadanía, entre ellos el de establecer lu-

gares de culto o de reunión con fines religiosos como parte esencial del contenido del derecho fundamental de libertad religiosa. Sin embargo, en los primeros momentos del fenómeno de migratorio las Comunidades autónomas (Andaluza, Catalana y Valenciana) y sus municipios en los que se concentraron un gran número de personas que profesaban creencias distintas a la fe católica tuvieron que afrontar situaciones hasta el momento, cuando menos desconocidas y, en otros casos, problemáticas a las que tenían que darle solución. Por ejemplo, la regularización de lugares o espacios utilizados para el culto que no cumplían con la normativa urbanística y que al estar mal comunicados, en áreas sin servicios o una inadecuada ubicación espacial generaban problemas de orden público (por falta de infraestructura, ruidos) o el constante rechazo o presiones vecinales a que se autorizaran la construcción de mezquitas, sinagogas, etc. en sus localidades. Con manifestaciones del fenómeno que a escala mundial ha sido denominado como efecto NIMBY acrónimo de “Not in My Back Yard” (que literalmente significa no en mi patio trasero) que radica en la reacción de oposición del algún sector de la ciudadanía a determinadas políticas o actuaciones de la administración local con incidencia territorial en el entorno inmediato de su domicilio.

En otros casos, las dificultades para solucionar estos asuntos tenían su origen en una actuación inadecuada de las entidades que conforman la Administración Local (encargadas de la elaboración de planes, aprobación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, cementerios y actividades funerarias, etc.) provocadas en unos supuestos, por la carencia de reglas concretas o de principios comunes de aplicación para la ordenación y apertura de lugares de culto en la normativa estatal y autonómica que regulan los equipamientos para uso religioso. En otros, por una gestión arbitraria, al exigirles nuevos requerimientos a última hora, excesivos gastos... que en la mayoría de las ocasiones terminaban:

- Con el cierre del local a pesar de los grandes esfuerzos realizados por la confesión religiosa para intentar su regularización.
- La confesión religiosa optaba porque sus lugares de culto funcionaran en la clandestinidad, sin realizar ninguna gestión administrativa. Intentaba que su actividad pasase totalmente desapercibida para las autoridades locales, y en el caso de ser localizados y requeridos para su regulación cambiaban apresuradamente de ubicación.
- Otras veces, recurrían al subterfugio de declarar que tan solo eran simples asociaciones y no iglesias, para no enfrentarse a los múltiples requisitos exigidos (PONCE).

De tal manera, que esta abundante casuística de la gestión pública de la diversidad/pluralidad religiosa se convierte en una parte importante de las políticas municipales.

4.1. PRINCIPIOS INFORMADORES DEL CONTROL ADMINISTRATIVO DE LOS LUGARES DE CULTO: UBICACIÓN, LICENCIAS DE APERTURA Y CONSTRUCCIÓN

La entrada en vigor de nuestra Constitución y con ella de la instauración de un régimen democrático hizo imprescindible una renovación legislativa en todos los ámbitos, y como no, también en las disposiciones que regulaban la materia urbanística lo que supuso un cambio de paradigma en todo lo relativo a la utilización del suelo. A partir de entonces, empieza a ser aceptada por todos plenamente la denominada función social de la propiedad entre los que se encuentran los de uso religioso. Por ello, cuando una confesión religiosa abre o proyecta la construcción de un nuevo lugar de culto, tiene que respetar como cualquier otro propietario que pone en marcha una actividad el ordenamiento jurídico general y el planeamiento urbanístico en particular. Por tanto los edificios de las confesiones religiosas destinados al culto estarán sujetos al régimen urbanístico general y, con ello, a las licencias urbanísticas destinadas al control de la construcción, al uso de las edificaciones y la división de los terrenos. De tal manera que será preciso solicitarlas cuando se den los casos previstos en la legislación urbanística, exactamente igual que en el caso del resto de los usos urbanísticos. Es algo perfectamente comprensible, en cuanto esa actividad se ejerce en lugares físicos que tienen que reunir una condiciones mínimas de seguridad o salubridad exigidos por la normativa en la materia y dentro de los límites que el artículo 3 de la Ley orgánica 1/1980, de 5 de julio impone al ejercicio de los derechos dimanentes de la libertad religiosa (CAÑIVANO).

La competencia para la ordenación del territorio y urbanismo como funciones públicas orientadas a la delimitación de los diversos usos a los que puede destinarse el suelo la poseen las CCAA en virtud de lo dispuesto en el art. 148.1.3º de la Constitución. Competencia que a su vez, comparten un ámbito de actuación con el Estado y la Administración Local. Tal concurrencia de títulos competenciales entre las distintas Administraciones Públicas origina algunas tensiones en torno a la autorización de los lugares de culto. Principalmente, provocadas por la dispersión normativa existente sobre el asunto que dificulta la elaboración de herramientas y criterios comunes y ocasiona una insuficiente coordinación y cooperación entre las distintas administraciones que en la práctica, tal circunstancia ha hecho que cada administración de ofrecen respuestas distintas cada una, desde su propia experiencia, a veces incluso, incumpliendo lo dispuesto en la LOLR (cuyo desarrollo reglamentario ha sido insuficiente) o en los Acuerdos de Cooperación firmados por el Estado con las confesiones no católicas. Por tanto, tal situación exige de manera ineludible un cambio de actitud en la actuación tanto de la Administración estatal, autonómica y, sobre todo, de la local para conseguir la necesaria colaboración y coordinación entre los distintos niveles de poder con competencias sobre el territorio (art.103.1 CE y legislación concordante) que eliminen tales deficiencias apuntadas. En todo caso, pensamos que la solución vendrá cuando dispongamos de un Derecho urbanístico-uniforme (con un mínimo común denominador) que en la ordenación urbanísti-

ca de los lugares de culto funcione conforme a los siguientes principios informadores:

- Principio de laicidad (neutralidad y separación) plasmado en el art. 16.3 CE que al establecer que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal” obliga a los poderes públicos dentro de un Estado neutral por un lado, a estar al servicio del libre desarrollo de la personalidad de sus ciudadanos para conseguir el real y efectivo de sus derechos fundamentales (art. 10.1CE). Por otro lado, supone la absoluta incompetencia del Estado para entrar en cuestiones de carácter estrictamente religiosas propias de las confesiones. Ya que, el Estado no puede erigirse en protector de dogmas, creencias o convicciones religiosas sean cuales fueran éstas. De igual manera, deberá impedir que pueda surgir cualquier posible confusión entre los fines u objetivos religiosos con los estatales o que las confesiones religiosas puedan formar parte de la Administración pública o ser equiparadas con ella.
- Principio de cooperación también recogido en el art. 16.3 exige a los poderes públicos adoptarlas medidas necesarias para el pleno y real disfrute del derecho de libertad religiosa.
- Principio de interdicción de la arbitrariedad que demanda que las intervenciones públicas estén debidamente motivadas y justificadas (racionalidad y justificación).
- Principio de igualdad y no discriminación del art 14 CE (material y formal) que prohíbe que entre la ciudadanía se produzcan situaciones de desigualdad o discriminación.
- Principio de proporcionalidad que no está plasmado de forma explícita pero si, implícitamente en la clausula de Derecho del art. 1.1 CE que requiere que las intervenciones públicas estén orientadas a lograr el interés general, sean lo menos restrictivas posible para los derechos de las personas y generar los mayores beneficios para la comunidad.
- Principio de acomodo razonable, se trata también de otra técnica no reconocida explícitamente en la Constitución pero si en otra normativa estatal y autonómica vigente que es preciso trasladar a la gestión de la diversidad religiosa. Reside en la adaptación del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas generadas. En este caso, en materia de diversidad religiosa para que facilite el ejercicio de derechos en plenas condiciones de igualdad.
- Principio de cohesión y función social que llevado a la práctica sirve para reforzar los vínculos de una determinada comunidad, mediante la integración de la diversidad y garantía de los derechos fundamentales en plena igualdad jurídica, en orden a alcanzar la paz social (PONCE/CABANILLAS).

En definitiva, que contemple la diversidad derivada de la gestión del pluralismo religioso que proporcionen los políticos y gestores públicos unas pautas claras de lo que pueden o no pueden hacer para no incurrir en la discrecionalidad político-administrativa.

A este espíritu de cambio responden a nivel estatal el [Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana](#) cuyo objeto es regular para todo el territorio nacional las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, concernientes con el suelo y un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, mediante la promoción y el fomento de las acciones que conducen a la rehabilitación de los edificios y a la regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes, cuando sean necesarias para asegurar a los ciudadanos una adecuada calidad de vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que permite la participación de la ciudadana en general y de las confesiones religiosas en particular en el procedimiento de elaboración del planeamiento urbanístico.

A nivel autonómico destaca la normativa catalana que ha regulado de manera específica la cuestión. Concretamente, [la Ley 16/2009, de 22 de julio, de los Centros de Culto de Cataluña](#) que establece que los Planes de ordenación urbanística municipales prevean suelos con la calificación de sistema de equipamiento comunitario donde se admitan los usos de carácter religioso; el [Decreto 94/2010, de 20 de julio de desarrollo de la ley 16/2009, de 22 de julio, de centros de culto](#). Así como, el [Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de urbanismo Catalana](#), donde se enmarca la regulación sobre edificación de nuevos centros de culto, y mantenimiento o reforma de los ya existentes (MARTÍN). A todo esto hay que añadir el hecho positivo de que se hayan empezado a elaborar los llamados «mapas de lugares de culto», para determinar la ubicación exacta de todos los centros religiosos.

En el ámbito de las Corporaciones locales la [Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local](#), su disposición adicional decimoséptima establece una regulación específica que afecta directamente a los lugares de culto. La ley pretende avanzar en el tema, previendo un procedimiento común a seguir para la apertura de lugares de culto en todo el territorio nacional que consiste en la presentación de una comunicación previa o declaración responsable, y eliminando la exigencia de licencia previa. Sin embargo, la realidad evidencia que muchos ayuntamientos parecen desconocer o hacer caso omiso de esta normativa y tienden a aplicar a los lugares de culto otras normativas previstas para las actividades económicas, las leyes ambientales, las normas para actividades nocivas, peligrosas, insalubres y peligrosas, o de espectáculos públicos y actividades recreativas. Con lo cual, encuentran una justificación para seguir exigiendo licencias, y dejan sin efectos el espíritu de la ley, que no es otro que simplificar los requisitos de la apertura de los lugares de culto al eliminar la necesidad de autorización previa municipal, sin perjuicio por supuesto del cumplimiento de la normativa de seguridad, salubridad, etc. aplicable. Dichas licencias tienen un carácter reglado, no tienen por finalidad otorgar el permiso para la realizar la actividad religiosa en sí misma, que es un derecho funda-

mental, sino para asegurar que el uso del local concreto para el que se otorga reúne las condiciones técnicas adecuadas al tipo de actividad. Por tanto, cualquier confesión que la solicite tiene derecho a obtenerlas, si cumple o reúne los requisitos legales establecidos al efecto y sin estar sujeta su concesión a control por parte de los tribunales.

De todo esto, deducimos que los lugares de culto o de reunión con finalidades religiosas, junto con los equipamientos de carácter cultural, docente, deportivo, sanitario, asistencial, de servicios técnicos y de transporte y los otros equipamientos que sean de interés público o de interés social, comprenden el sistema urbanístico de equipamientos comunitarios. Por tanto, al servicio de la población, de interés público que forman parte de los sistemas urbanísticos, es decir, del suelo destinado al establecimiento de servicios y actividades de interés público y social.

Quizás, la solución a largo plazo esté en que la ciudadanía pueda contar con una amplia oferta de espacios multiconfesionales cada vez más necesarios en Occidente por la realidad interreligiosa que convive en nuestras ciudades. Eso sí, siempre que se contemple la diversidad/pluralidad de perfiles (creencias) de sus posibles usuarios, que su uso resulten cómodos para todos, que no lesionen los mínimos exigibles como imprescindibles por cada confesión y que sobre todo, impliquen para el Estado una estricta observancia del principio de aconfesionalidad y de neutralidad estatal. Actualmente, en esta dirección parecen orientarse algunas políticas de gestión tanto en el ámbito internacional con proyectos tan interesantes como el denominado “house of one” dedicada al culto y la oración de las tres principales religiones monoteístas (cristiana, musulmana y judía).

5. LOS CEMENTERIOS RELIGIOSOS: ASPECTOS JURIDICOS

En nuestro ordenamiento jurídico el reconocimiento del derecho a los ritos funerarios y las modalidades de sepultura así como el practicar los enterramientos conforme a las propias creencias sin discriminación por motivos religioso son componentes esenciales de la libertad religiosa que quedan garantizados en el art. 16 de la Constitución. De no ser así, se podría producir un atentado contra la conciencia de no darse sepultura conforme a las propias convicciones (ALENDA). Además, es un elemento indispensable de cara a la integración de la población inmigrante. Se impone pues el respeto a ritos y ceremonias, hábitos y costumbres, propios de las organizaciones religiosas, siempre que queden garantizados valores, como el respeto a los demás, el orden público y, de manera especial, la regulación jurídica de la exigencias sanitarias mortuarias (RODRÍGUEZ). Sin embargo, al igual que ocurre con los lugares de culto a la hora de la regulación y delimitación de su objeto surgen algunos inconvenientes ocasionados en algunos casos, por la confluencia de varios factores:

- La concurrencia de competencias estatales, autonómicas y municipales sobre la materia.
- Las Entidades locales tienen el principal protagonismo en la gestión pública de dichas prestaciones a sus vecinos (a través de las ordenanzas municipales) pero tal tarea la tienen que llevar a cabo conforme a las obligaciones mínimas determinadas por la legislación estatal (para garantizar las condiciones generales de igualdad a todos los españoles en el territorio) a su vez, complementada por la de las Comunidades Autónomas con competencias en todo lo relativo a ordenación del suelo, transportes y sanidad interior.
- La inexistencia de unos parámetros normativos claros,
- La escasez de suelo municipal
- En algunos supuestos la ausencia de interlocutares válidos de la confesión religiosa en cuestión con la que la entidad local pueda pactar (TOLIVAR).

Con anterioridad a la vigente LOLR y a la entrada en vigor de nuestra Constitución de 1978 la primera Ley de libertad religiosa con la que contamos en España -ya citada- (Ley 44/1967, de 28 de junio, sobre el ejercicio del derecho civil a la libertad) reconocía el derecho de todos los españoles a recibir sepultura conforme a sus convicciones religiosas siempre que fueran compatibles con el orden público y las normas sanitarias vigentes. Además, disponía que las asociaciones confesionales no católicas podían solicitar la adquisición y habilitación de cementerios propios en aquellos municipios donde tuvieran una sección local anotada en el Registro establecido a tal efecto.

Más tarde, la [Ley 49/1978 de 3 de noviembre 1978 sobre Enterramiento en Cementerios municipales](#) acabó con el sistema de compartimentos en los cementerios públicos y exigió que en el plazo de un año desde su entrada en vigor se procediera a restablecer la comunicación con el resto del cementerio (aplicable a los establecimientos públicos pues los privados quedaban exentos de cumplir con tales previsiones) y a que habilitasen en los cementerios municipales un recinto adecuado para que las personas que no profesaran la fe católicas pudieran recibir sepultura digna conforme a sus convicciones religiosas y sin discriminación alguna por motivos religiosos u de otro tipo. De tal manera, que los ritos funerarios y actos de culto en las capillas o lugares destinados a tal efecto se pudieran practicar sobre cada sepultura de conformidad con lo dispuesto por el difunto o con lo que, en su caso, la familia determinase (arts. 1 y 2 respectivamente). Así como a construir cementerios municipales cuando en el término municipal no existiese un lugar de enterramiento en el que pudiera cumplirse con lo dispuesto en los dos artículos precedentes.

Después, la Ley 44/1967 fue derogada por la vigente LOLR que garantiza el derecho de toda persona a recibir sepultura digna sin discriminación por motivos religiosos, pero no determina nada respecto a los cementerios privados ni tampoco sobre la posibilidad de habilitar recintos confesionales en los cementerios municipa-

les. No obstante, la legislación vigente de Derecho mortuario permite la existencia de cementerios confesionales o privados.

En este sentido, la Iglesia católica siempre ha reclamado el derecho a poseer sus propios cementerios (GONZÁLEZ). En el c. 1240 del CDC realiza una graduación de preferencias de lugares de enterramientos:

1. “Donde sea posible, la Iglesia debe tener cementerios propios, o al menos un espacio en los cementerios civiles bendecido debidamente, destinado a la sepultura de los fieles.
2. Si esto no es posible, ha de bendecirse individualmente cada sepultura.”

Además, el c. 1041 permite:

1. “Las parroquias y los institutos religiosos pueden tener cementerio propio.
2. También otras personas jurídicas o familias pueden tener su propio cementerio o panteón, que se bendecirá a juicio del Ordinario del lugar”.

Por tanto, en el supuesto de que las leyes estatales no lo permitan, debe procurarse reservar un espacio en los cementerios civiles, que, una vez bendecido, haga sus veces. Donde ni siquiera esto sea posible deberá bendecirse cada sepultura (MARTÍN). No obstante, los Acuerdos con la Iglesia Católica no aluden expresamente a los cementerios. El Acuerdo Jurídico en art. I, 5 sólo se hace referencia a los lugares de culto, pero quedan incluidos en su régimen jurídico. Con lo cual, los cementerios podrán gozar, de este modo, de inviolabilidad y, llegado el caso, se expropiarán de acuerdo con el procedimiento especial (RAMÍREZ).

Respecto a las confesiones no católicas tuvimos que esperar a la firma, en 1992, de los Acuerdos de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas minoritarias para que se aludiera expresamente a la cuestión. Concretamente, los acuerdos suscritos con la FCI y con la CIE, refieren, en su articulado al régimen jurídico de los cementerios (RODRÍGUEZ, 2009).

El Acuerdo con la FCI establece:

Art. 2.6: “Los cementerios judíos gozarán de los beneficios legales que este artículo establece para los lugares de culto. Se reconoce a las Comunidades Israelitas, pertenecientes a la FCI, el derecho a la concesión de parcelas reservadas para los enterramientos judíos en los cementerios municipales, así como el derecho de poseer cementerios judíos privados, con sujeción a lo dispuesto en la legislación de régimen local y de sanidad. Se adoptarán las medidas oportunas para la observancia de las reglas tradicionales judías, relativas a inhumaciones, sepulturas y ritos funerarios, que se realizarán con intervención de la Comunidad judía local. Se reconoce el derecho a trasladar a los cementerios pertenecientes a las Comunidades Israelitas los cuerpos de los difuntos judíos, tanto de los actualmente inhumados en cementerios municipales como de

aquellos cuyo fallecimiento se produzca en localidad en la que no exista cementerio judío”.

En el mismo sentido, el acuerdo con la CIE dispone:

Art. 2.5: “Los cementerios islámicos gozarán de los beneficios legales que el Artículo 5 establece para los lugares de culto. Se reconoce a las Comunidades Islámicas pertenecientes a las Comisión Islámica de España, el derecho a la concesión de parcelas reservadas para los enterramientos islámicos en los cementerios municipales, así como el derecho a poseer cementerios islámicos propios. Se adoptarán las medidas oportunas para la observancia de las reglas tradicionales islámicas, relativas a inhumaciones, sepulturas y ritos funerarios, que se realizarán con intervención de la Comunidad Islámica local.

Se reconoce el derecho a trasladar a los cementerios pertenecientes a las Comunidades Islámicas, los cuerpos de los difuntos musulmanes, tanto de los actualmente inhumados en cementerios municipales como de aquellos cuyo fallecimiento se produzca en localidad en la que no exista cementerio islámico, con sujeción a lo dispuesto en la legislación de Régimen Local y de Sanidad.”

Con lo cual, de lo dispuesto en ambos acuerdos se deduce el reconocimiento del derecho:

- A. A contar con cementerios propios;
- B. A la concesión de parcelas en los cementerios municipales reservadas a los enterramientos judíos o islámicos;
- C. A la observancia de las reglas tradicionales y de los ritos propios;
- D. A poder trasladar a los cementerios propios los cuerpos de las personas inhumadas en cementerios municipales y los de aquellas cuyo fallecimiento se produzca en localidad en la que no exista cementerio confesional judío o islámico.

A pesar de ello, en la normativa estatal aún quedan otros aspectos por concretar como la reserva de parcelas o el modo de cumplir las exigencias de las tradiciones propias de las confesiones religiosas respecto al tratamiento de los cadáveres, su traslado y la forma de practicar la sepultura. Circunstancia, que en la práctica ocasiona que las distintas entidades locales les den soluciones distintas. En el caso de la reserva de parcelas algunos municipios reservan parcelas en los cementerios municipales para enterramientos de una determinada confesión religiosa, mientras que en otros esa cesión la consideran contraria a lo dispuesto en la normativa vigentes sobre enterramiento en cementerios.

Respecto al cumplimiento de los ritos propios de cada confesión al tratamiento de los cadáveres, su traslado y la forma de practicar la sepultura se ve limitado por cuestiones de salud pública (artículo 3.1 LOLR) establecidos en la legislación de régimen local y de sanidad. Ya que, algunas prácticas funerarias de las comunidades islámicas

plantean problemas de compatibilidad con las normas de sanidad mortuoria (práctica de enterrar el cadáver sin féretro, en contacto directo con la tierra, con la reagrupación de tumbas o con la prohibición de exhumar los cuerpos). Ya el Informe anual sobre la situación de la libertad religiosa en España del año 2017 señalaba la conveniencia de que los distintos reglamentos autonómicos de Policía Sanitaria Mortuoria fueran revisados para que al tener en cuenta la diversidad religiosa permitieran la posibilidad de entierro en fosa sin ataúd a los fieles musulmanes. Y, en este sentido, los datos facilitados por la CIE señalan que en la actualidad, se admiten en Ceuta, Melilla, Comunidad Valenciana y Andalucía. Concretamente, el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía establece :

Artículo 21. 4 “En aquellos casos en que, por razones de confesionalidad, así se solicite y se autorice por el Ayuntamiento, siempre que se trate de cadáveres incluidos en el Grupo 2 del artículo 4 de este Reglamento (personas cuya causa de defunción no represente un riesgo sanitario tanto para el personal funerario como para la población general, podrá eximirse del uso de féretro para enterramiento, aunque no para la conducción.”

En cambio, en otras Comunidades autónomas se considera que dicha normativa es de orden público y no admiten excepciones a su cumplimiento por motivaciones religiosas.

6. AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Cuáles son las dimensiones que presenta el Derecho de libertad religiosa?
2. ¿En el ordenamiento jurídico español está reconocido a las confesiones religiosas el derecho de establecer lugares de culto? ¿Dónde?
3. ¿Qué entendemos por “actos de culto”?
4. ¿Cuándo y dónde empieza a utilizarse el termino “lugar de culto” en el ordenamiento jurídico español?
5. ¿En que consiste la técnica del presupuesto?
6. ¿Qué valor posee la certificación expedida por la autoridad de la confesión religiosa de que un inmueble es un lugar de culto? ¿Qué consecuencias jurídicas genera?
7. Las distintas Administraciones locales ¿están obligadas a adoptar medidas en materia urbanística para garantizar el pleno ejercicio del Derecho de libertad religiosa de las iglesias, confesiones y comunidades religiosas con reconocimiento en España? En caso afirmativo ¿Qué tipo de medidas?
8. ¿En qué consiste el denominado efecto NIMBY?

9. ¿Puede un Ayuntamiento segregar territorialmente un lugar de culto? Razona la respuesta.
10. ¿Qué otras soluciones imaginativas se están empezando a poner en marcha en algunos municipios principalmente, motivada por la escasez de suelo urbano para atender a la necesidad de las distintas confesiones religiosas de poder contar con lugares de culto ?
11. El derecho a recibir sepultura digna ¿permite excluir de un cementerio a creyentes de otra religión?
12. ¿Podemos distinguir entre cementerios públicos y privados?
13. ¿En España está garantizado el derecho a establecer cementerios a cualquier confesión religiosa, tenga o no acuerdos firmados con el Estado?

7. BIBLIOGRAFÍA

- ALEDA SALINAS, M., Los acuerdos de cooperación del Estado español con judíos, protestantes y musulmanes como garantía y regulación de objeciones de conciencia. *Revista General de Derecho*, núm. 608, 1995, pp.4787-48.
- CANO MURCIA, A., El nuevo régimen jurídico de las licencias de apertura: adaptado a la Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, La Ley, Madrid 2010, 135-13.
- CAÑIVANO SALVADOR, M.A. Régimen de intervención de la administración en la apertura de centros de culto: perspectiva estatal, autonómica y local, con especial referencia a Cataluña en *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado* 38, 2015.
- DÍAZ CALVARRO, J.M. Régimen jurídico de los lugares de culto en España. Especial referencia a los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística y los mecanismos de control administrativo. Tesis Doctoral. Universidad de Extremadura, 2018. Consultad en línea: http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/7917/TDUEX_2018_Diaz_Calvarro.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- DIEZ DE VELASCO, F., Guía técnica para la implementación y gestión de espacios multiconfesionales, Observatorio del Pluralismo Religioso en España, Madrid, 2011.
- INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN ESPAÑA 2017. Edit. Ministerio de Justicia. Secretaría General Técnica. Madrid, 2018.
- GONZÁLEZ-VARAS IBAÑEZ, A., Libertad religiosa y cementerios: incidencia del factor religioso sobre las necrópolis, en *Ius Canonicum*, XLI, N. 82, 2001, pp. 645-695.
- GONZÁLEZ SÁNCHEZ, M., Competencias de las Entidades locales en relación con los lugares de culto, en *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, 2010, pp. 557-590. INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN ESPAÑA DEL AÑO 2017. Gobierno de España. Ministerio de Justicia. Madrid, 2018.

- GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J., Libertad religiosa y urbanismo. Estudio de los equipamientos de usos religiosos en España, EUNSA, Pamplona, 2010.
- GUARDIA HERNÁNDEZ, J.J., Participación ciudadana en la elaboración del planeamiento urbanístico municipal: una propuesta de reforma de la Ley catalana 16/2009, en *Revista de Derecho Canónico y de Derecho Eclesiástico del Estado* 38, IUSTEL, Valencia, 2015.
- GONZÁLEZ SÁNCHEZ, M., Competencias de las Entidades locales en relación con los lugares de culto, en *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, 2010, pp. 557-590.
- MORENO ANTÓN, G., “Tratamiento urbanístico de los lugares de culto: a propósito del Proyecto de Ley de Cataluña sobre centros de culto y de reunión con fines religiosos”, en *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, núm. 17, Madrid, 2008.
- MORERAS, JORDI y TARRÉS, SOL Guía para la gestión de la diversidad religiosa en cementerios y servicios funerarios. Editorial: Observatorio del Pluralismo Religioso en España, Madrid, 2013.
- MARTÍN DE AGAR, J., T. Lugares de culto. Marco de la regulación canónica y tipología ‘Lugares de culto. Marco de la regulación canónica y tipología’ en actas del IX Simposio Internacional del Instituto Martín de Azpilcueta “*Régimen legal de los lugares de culto*” *Nuevas fronteras de la Libertad religiosa*. Eunsas, Pamplona, 2013, pp. 131-162.
- MARTÍN GARCÍA, Mª MAR Derecho De libertad religiosa y establecimiento de centros de culto. A propósito de su desarrollo legal en Cataluña, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, núm. 94, enero-abril (2012), págs. 239-265.
- MOTILLA DE LA CALLE, A., “La protección de los lugares de culto islámico”, en *Los musulmanes en España: libertad religiosa e identidad cultural*, Madrid, 2004, pp. 79-106.
- OBSERVATORIO DEL PLURALISMO RELIGIOSO EN ESPAÑA en línea www.observatorioreligion.es/
- PÉREZ PRIETO, V., Espacios sagrados en el cristianismo y otras religiones. El necesario espacio sagrado interreligioso, en *Actas del Congreso de arquitectura religiosa contemporánea*, n. 2-II (2011).
- PONCE SOLÉ, J., La distribución competencial de la cuestión religiosa en la Administración Pública española: especial referencia al ámbito de los Gobiernos Locales. En particular, la regulación referida a la existencia, ubicación, apertura y funcionamiento de los lugares de culto religioso, en *Jornadas sobre religión, diversidad cultural y cohesión social: un reto para el siglo XXI*, Córdoba, 2007.
- PONCE SOLÉ, J., (coord.) Ciudades, Derecho urbanístico y libertad religiosa. Elementos comparados de Europa y Estados Unidos. Barcelona 2010.
- PONCE SOLÉ, J/CABANILLAS, J.A., Guía de apoyo a la gestión de la diversidad religiosa Lugares de culto, ciudades y urbanismo. Observatorio del pluralismo religioso en España. Madrid, 2011.
- ROCA FERNÁNDEZ, Mª, J., Interpretación del término ¿inviolabilidad? en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede, sobre Asuntos Jurídicos, de 3-I-1979, en *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, N. 22, ENERO 2010.

- ROCA FERNÁNDEZ, M^a, J., Interpretación del término ¿inviolabilidad? en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede, sobre Asuntos Jurídicos, de 3-I-1979, en *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, Nº. 29, 2012.
- RODRIGUEZ BLANCO, M., Religious freedom and burial places (preliminary remarks) en *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado* 19 (2009), pp.1-23.
- RODRÍGUEZ BLANCO, M., *Regimen Jurídico de los cementerios y sepulturas* editorial Comares Granada, 2015.
- RAMÍREZ NAVALÓN, R,M, «Los lugares de culto y los cementerios», en *Los Acuerdos del Estado español con los judíos, musulmanes y protestantes*. Salamanca. 1994, pp.119-134.
- SEGLERS GÓMEZ-QUINTERO, A., *Libertad religiosa y Estado autonómico*; Albolote; Granada; 2005.
- TOLIVAR ALAS, L. Los servicios mortuorios locales: cementerios y servicios funerarios, en *Tratado de Derecho Municipal*, S. Muñoz Machado (dirigido por), vol. II, 2^a edición, Civitas, Madrid, 2003, p. 1748 y ss.
- VÁZQUEZ GARCÍA PEÑUELA, J. M^a, La noción de lugar de culto y las certificaciones confesionales en, *La religión en la ciudad. Dimensiones jurídicas del establecimiento de lugares de culto*. Corsino Álvarez Cortina, A/ Rodríguez Blanco, M. (coords.), Granada 2012, 163 pp.1-18.
- VIDAL GALLARDO, M., Pluralismo y ordenación urbanística de los lugares de culto, en *Anales de Derecho* Número 32, 2014, pp. 1-35.